



Roj: **STSJ M 6938/2017 - ECLI: ES:TSJM:2017:6938**

Id Cendoj: **28079330072017100304**

Órgano: **Tribunal Superior de Justicia. Sala de lo Contencioso**

Sede: **Madrid**

Sección: **7**

Fecha: **20/06/2017**

Nº de Recurso: **6/2016**

Nº de Resolución: **367/2017**

Procedimiento: **Procedimiento ordinario**

Ponente: **JOSE FELIX MARTIN CORREDERA**

Tipo de Resolución: **Sentencia**

Tribunal Superior de Justicia de Madrid

Sala de lo Contencioso-Administrativo

**Sección Séptima**

C/ General Castaños, 1 , Planta Baja - 28004

Tlfs. 914934767-66-68-69

33009730

**NIG:** 28.079.00.3-2015/0027019

**Procedimiento Ordinario 6/2016**

**Demandante:** AYUNTAMIENTO DE ALBORAYA

PROCURADOR D./Dña. ALFONSO DE MURGA FLORIDO

**Demandado:** DIRECCION GENERAL DE LA FUNCION PUBLICA

Sr. ABOGADO DEL ESTADO

**SENTENCIA N°**

Presidente:

**D./Dña. M<sup>a</sup> JESUS MURIEL ALONSO**

Magistrados:

**D./Dña. ELVIRA ADORACION RODRIGUEZ MARTI**

**D./Dña. IGNACIO DEL RIEGO VALLEDOR**

**D./Dña. SANTIAGO DE ANDRÉS FUENTES**

**D./Dña. JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA**

En la Villa de Madrid a veinte de junio de dos mil diecisiete.

Esta Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (Sección Séptima) ha visto el recurso contencioso administrativo nº 6/2016 interpuesto por el procurador don Alonso de Murga Florido, en nombre y representación de Ayuntamiento de Alboraya, impugnando la resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, publicada en el BOE nº. 276 correspondiente al 18 de noviembre 2015, en cuanto incluye la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya. Ha intervenido como demandada la Administración General del Estado representada y dirigida por el Abogado del Estado.



Ha actuado como ponente don JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA, magistrado de la Sala.

## ANTECEDENTES DE HECHO

**PRIMERO** . La representación procesal de Ayuntamiento de Alboraya interpuso recurso contencioso-administrativo contra la resolución a la que se ha hecho mención en el encabezamiento y, formalizada demanda, en la que alega los hechos y fundamentos que considera pertinentes termina su escrito con la solicitud de una sentencia «por la que estimando [la] demanda, [...] anule, revoque y deje sin efecto la resolución de 27 de octubre de 2015 dictada por la Dirección General de la Función Pública por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, en lo relativo a la inclusión del puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya (Valencia) entre los puestos a cubrir mediante el concurso unitario convocado, declarándose la exclusión de dicho puesto de Tesorería del concurso unitario por estar el mismo ocupado por funcionario propio cualificado de la Corporación Local del Alboraya, todo ello con expresa imposición de costas a la Administración demandada».

**SEGUNDO** . El Abogado del Estado contestó a la demanda mediante escrito en el que alega los hechos y fundamentación jurídica que estima pertinentes y solicita la desestimación del recurso interpuesto y que se confirme en todas sus partes la legalidad de la resolución impugnada.

**TERCERO** . Practicada la prueba declarada pertinente y, al no estimarse necesaria la celebración de vista, se concedió a las partes el término sucesivo de diez días, a fin de que presentaran sus conclusiones. Trámite cumplimentado por escritos presentados e incorporados a los autos.

Conclusas las actuaciones, se señaló para la votación y fallo el día 14 de junio de 2017, fecha en que ha tenido lugar.

## FUNDAMENTOS DE DERECHO

**PRIMERO** . Diversos puestos de tesorería de Ayuntamientos con secretaría clasificada en clase 1ª que venían siendo desempeñados por funcionario de la Corporación mediante autorización excepcional al amparo de la Disposición Adicional 3ª del **Real Decreto 1732/1994** , como es el caso del Ayuntamiento de Alboraya, se incluyeron en el concurso unitario de traslados convocado por Resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública (BOE de 18 de noviembre).

Frente a esa inclusión se dirige el recurso que ahora examinamos, interpuesto por el Ayuntamiento, cuyo puesto de tesorería es desempeñado por funcionario de la corporación del Subgrupo A1, con titulación de economista, desde el año 2002, y cuenta con la autorización concedida de acuerdo con las normas de aplicación.

Como enseguida veremos, la tesis principal vertebradora de la demanda (complementada con otros argumentos secundarios) es que el puesto controvertido no se encuentra vacante y, en consecuencia, no puede ser incluido en la convocatoria impugnada en el extremo ya referido.

Se comienza la demanda exponiendo que el puesto de tesorería del Ayuntamiento de Alboraya no se encuentra vacante, pues viene desempeñándose de forma regular, legal e ininterrumpida desde el año 2002 hasta la actualidad por don Donato , funcionario del propio Ayuntamiento con título de economista, quien cuenta con la cualificación requerida así como con la debida autorización autonómica, y lo desempeña dentro de un marco normativo en vigor que así lo permite. Se explica que mediante la Resolución de Alcaldía nº P-121 de fecha 13 de diciembre de 2002 se le habilitó como Tesorero del Ayuntamiento de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.3 del RD 1174/1987 . A continuación se señala que por acuerdo del Pleno del Ayuntamiento de 26 de mayo de 2005 solicitó de la Generalitat Valenciana tanto la modificación de la clasificación de la Secretaría e Intervención del Ayuntamiento a la de clase primera, así como que el puesto fuera desempeñado por funcionario propio cualificado, esto al amparo del art. 9.2 del **decreto** 159/1997 , regulador de las competencias de la Generalitat), accediéndose a ambos extremos por la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana mediante la Orden de 12 de julio de 2005. En su virtud, se autorizó el desempeño del puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya por funcionario de la Corporación debidamente cualificado, por lo que don Donato continuó desempeñando el puesto. En armonía con lo anterior, la RPT del Ayuntamiento contempla el puesto de Economista/Tesorero, integrado en el Subgrupo A1 de la Administración Especial.

De este modo, se expresa incisivamente por el Ayuntamiento que ha de partirse de la premisa de que el puesto controvertido no puede subsumirse en ninguno de los supuestos contemplados en la base primera de la convocatoria, al faltar el presupuesto habilitante cual sería la declaración de que se trata de un puesto vacante



en los términos que se desprenden en la propia base primera. Para nutrir y dar consistencia a esa premisa se cita el conjunto normativo integrado por el artículo 2 f/ y la Disposición Adicional Tercera del **Real Decreto 1732/1994**, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a habilitados a funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, por el artículo el artículo 168.2 de la Ley 8/2010, de la Generalitat, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, por el artículo 8 del **Decreto** 32/2013, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito territorial de la Comunitat Valenciana, así como por la Orden de la Consellería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat Valenciana de 12 de julio de 2005 citada.

Contradice seguidamente el letrado de la Administración Local recurrente que el artículo 92 bis de la Ley 7/1985 Reguladora de las Bases del Régimen Local (LRBRL) introducido por la Ley 27/2013 de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local (LRSAL) en la que se escuda la Administración Estatal, pueda servir de cobertura para tal inclusión, a la vez que la Administración convocante. No se ha producido derogación, ni desplazamiento, ni revocación de las normas que componen el marco legal de aplicación mencionado, el cual ha sido ignorado por la resolución recurrida. En particular se remarca que no puede entenderse que el art. 92 bis de la LRBRL haya derogado la autorización prevista en la Disposición Adicional 3ª del **Real Decreto 1732/1994** sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de la administración local con habilitación nacional.

Desde una perspectiva complementaria, alega el Ayuntamiento que la inclusión en el concurso unitario del puesto de es contraria a los propios actos anteriores de la Dirección General de la Función Pública. A este respecto se expresa que tras la aprobación de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público, que derogó expresamente el artículo 92 de la Ley 7/1985 de Bases del Régimen Local, el Ministerio de Administraciones Públicas jamás convocó mediante el supletorio concurso unitario aquellos puestos de Tesorería que se hallaban cubiertos excepcionalmente mediante la oportuna autorización autonómica aun cuando no eran objeto de convocatoria en los sucesivos concursos ordinarios anuales de las respectivas Corporaciones Locales, y tampoco lo hizo una vez entrada en vigor la LRSAL (31/2/2013).

Y a estos argumentos se superponen otros motivos en los que se asienta la solicitud de nulidad. Son los siguientes:

a/ La infracción del artículo 49.1.8 de la Ley Orgánica 1/2006 por la que se modificó el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y del resto de normativa autonómica en la materia al no respetar la competencia autonómica en materia de la Administración Local contenida en el **Decreto** 32/2013, del Consell, por el que se regula el régimen jurídico del personal funcionario con habilitación de carácter estatal en el ámbito de la Comunidad Valenciana, y cuyo art. 8 contempla la posibilidad de que la Consellería competente autorice de forma excepcional el desempeño del puesto de tesorería por un funcionario de la Corporación debidamente cualificado.

b/ La vulneración del principio de lealtad institucional tanto respecto a la Administración Autonómica de la Administración Local (Ayuntamiento de Alboraya, en este caso), trasunto del principio de buena fe entre las Administraciones, al revocarse de facto y unilateralmente la Orden de la Administración por la que se autorizó el desempeño, sin ni siquiera haberla oída, y sin haber informado previamente al Ayuntamiento de la inclusión en la convocatoria. Al haberse prescindido del procedimiento, se incide asimismo en la causa de nulidad prevista en el artículo 62.1.e) de la Ley 30/1992.

c) La vulneración del **Real Decreto 1732/1994**, por inaplicación de sus artículos 11 a 26, al no respetarse el carácter supletorio del concurso unitario respecto del ordinario, a convocar primeramente por cada Administración Local concernida.

d) El incumplimiento de lo dispuesto en el art. 19.dos de la Ley 48/2015 de Presupuestos Generales del Estado para el año 2016, ya que la cobertura supondría inevitablemente el incremento de la plantilla presupuestaría que afectaría indefectiblemente al incremento global de las retribuciones de personal.

**SEGUNDO** .- Para oponerse a la demanda, observa el Abogado del Estado que el puesto de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya está reservado a funcionarios de la Administración local con habilitación de carácter nacional, lo que impide entender que el funcionario de la corporación que lo ocupa tenga derecho a permanecer en el mismo. Para dar cuerpo a su tesis, explica que con anterioridad a la entrada en vigor de la LRSAL, la Disposición Adicional Tercera del **Real Decreto 1732/1994** permitía que las Comunidades Autónomas autorizaran excepcionalmente, ante la escasez en aquellas fechas de personal habilitado suficientes para cubrir los puestos de trabajo de Tesoreros de las Corporaciones Locales, el desempeño del puesto de tesorería en Ayuntamientos de "población inferior a 50.000 habitantes y presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas" a funcionario de la Corporación debidamente cualificado, aunque no se tratara de funcionario de la Administración Local con habilitación de carácter nacional. Sin embargo, advierte con especial énfasis,



esa autorización excepcional no modificaba la clasificación del puesto como reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2º del mismo RD **1732/1994**, aunque permitía que se desempeñara excepcionalmente por funcionario propio a instancias de una Comunidad Autónoma a la que nunca se le transfirieron competencias al respecto, limitándose la legislación estatal a atribuir a las Comunidades Autónomas una facultad limitada y transitoria al respecto.

Esas son las razones por las que los puestos de Tesorería de Ayuntamientos con secretaría clasificada en clase 1ª, que venían siendo desempeñados por el respectivo funcionario de la corporación mediante autorización excepcional, se incluyeran en el concurso unitario de traslados impugnado al tratarse de puestos reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional y no haberse convocado por las Corporaciones Locales en el correspondiente concurso ordinario.

Hay que tener en cuenta, acentúa también el Abogado del Estado, que, a partir de la entrada en vigor de la LRSAL, que adiciona un artículo, el 92.bis), a la LRBRL resulta inoperativa de futuro la cobertura excepcional de puestos prevista por la Disposición Adicional Tercera del **Real Decreto 1732/1994**, momento que se aprovecha por la Administración para sacar estos puestos a concurso.

Para el Abogado del Estado, en definitiva, como el desempeño es excepcional, y no de carácter definitivo, y dado que el puesto se encuentra reservado a funcionario de Administración Local con habilitación de carácter nacional, no puede entenderse que ostente derecho alguno a permanecer quien lo viene ocupando, confundiendo de esta forma la cobertura excepcional, y por tanto transitoria, con su provisión definitiva.

Y respecto a las demás alegaciones de la demanda arguye el Abogado del Estado que no puede invocarse un nombramiento de carácter definitivo; que el nombramiento, excepcional nació con limitaciones que excluyen irretroactividad alguna; que la postura del ayuntamiento originaría inseguridad jurídica al intentar convertir un procedimiento excepcional de cobertura de puestos de trabajo en otro ordinario; que la inclusión del puesto en el concurso no es contraria a los propios hechos por parte de la Administración del Estado convocante en la medida que se ha respetado el nombramiento ahora cuestionado, durante años; y que el hecho de que el puesto cuestionado hubiera sido respetado hasta el momento por las sucesivas convocatorias no acredita apariencia de buen derecho en la medida que el cometido disputado fue desempeñado en virtud de un nombramiento totalmente legal si bien sometido a la oportuna transitoriedad.

Hasta aquí, resumidos, los razonamientos esgrimidos por el Abogado del Estado en contraposición a los aducidos en la demanda.

**TERCERO**. Expuestas en la forma que precede las posiciones de las partes, comenzaremos el análisis de las cuestiones propuestas partiendo como idea fundamental de que existen funciones públicas, obligatorias y necesarias en las Corporaciones Locales cuya responsabilidad está reservada a funcionarios de Administración Local con habilitación nacional. Entre ella se incluyen las de contabilidad, tesorería y recaudación.

Con todo, como excepción a la regla de la reserva a la escala de funcionarios de la Administración Local con habilitación de carácter nacional, el artículo 92.4 de la LRBRL, en su redacción originaria, previó la posibilidad de desempeño de la tesorería mediante funcionarios propios de la corporación local, en los siguientes términos:

«La responsabilidad administrativa de las funciones de contabilidad, tesorería y recaudación podrá ser atribuida a miembros de la Corporación o funcionarios sin habilitación de carácter nacional, en aquellos supuestos excepcionales en que así se determine por la legislación del Estado».

Tenía su complemento y desarrollo esa previsión en el **Real Decreto 1732/1994**, sobre provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de Administración local con habilitación de carácter nacional. Su disposición adicional tercera, bajo el epígrafe « Puestos de tesorería: excepciones » se expresa así:

«Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 3.000.000.000 de pesetas, cuya secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar el desempeño del puesto de tesorería por funcionario de la Corporación debidamente cualificado».

Como se recordará, el artículo 92 de la LRBRL en la redacción originaria (transcrita) estuvo vigente hasta la entrada en vigor el 13 de mayo de 2007 de la Ley 7/2007 del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), que lo derogó. Al respecto de los funcionarios con habilitación nacional, en su disposición adicional segunda dispone que la creación, clasificación y supresión de puestos de trabajo reservados a funcionarios



con habilitación de carácter estatal corresponde a cada Comunidad Autónoma, de acuerdo con los criterios básicos que se establezcan por ley».

Una nueva modificación de la materia se produce con la LRSAL, al introducir un nuevo artículo 92 bis en la LRBRL, en el que como ya hemos tenido ocasión de ver al exponer las tesis en competencia, se sitúa el corazón de la polémica a la que tenemos que dar solución.

En los particulares extremos que aquí importan dicho art. 92 bis de la LRBRL se expresa así:

« Artículo 92 bis. Funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

1. Son funciones públicas necesarias en todas las Corporaciones locales, cuya responsabilidad administrativa está reservada a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional:

[...]

b) El control y la fiscalización interna de la gestión económico-financiera y presupuestaria, y la contabilidad, tesorería y recaudación.

6. El Gobierno, mediante **real decreto**, regulará las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional. En todo caso, el concurso será el sistema normal de provisión de puestos de trabajo. El ámbito territorial de los concursos será de carácter estatal.

[...]».

Hay que parar mientes en esa redacción en cuanto no incorpora excepción alguna a la reserva del desempeño de puestos de tesorería por funcionarios de administración local con habilitación estatal (ni que decir tiene que en los párrafos elididos tampoco se encuentra). Contiene, así y todo, una previsión de que el Gobierno, mediante **real decreto**, regule las especialidades correspondientes de la forma de provisión de puestos reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional.

Fuera de eso, la LRSAL contiene una norma de pervivencia temporal: establece en la disposición transitoria 7ª que en tanto no entre en vigor el Reglamento previsto en el artículo 92 bis de la Ley 7/1985, y en todo aquello que no se oponga a lo dispuesto en ella, mantiene su vigencia la normativa reglamentaria referida a los funcionarios incluidos en el ámbito de aplicación del citado artículo.

**CUARTO**. Con la base de lo dicho, podemos sentar como inicial conclusión en el punto de partida que la posibilidad de la cobertura excepcional del puesto de tesorería por funcionario propio de la corporación contemplado en la Disposición Adicional Tercera del **Real Decreto 1732/1994** ha perdido sustento dado que el art. 92. Bis de la LRBRL no prevé excepción alguna para la regla de que las funciones de tesorería de los Ayuntamientos quedan reservadas a funcionarios de administración local con habilitación nacional.

Sin embargo, esta primera conclusión, coincidente con la postura de la Administración y con su representante en este proceso, no deberá inducirnos a juicios apresurados, porque con ello el problema, a la verdad, queda sin resolver. Y es que la reserva para el desempeño de la tesorería que resulta del art. 92 bis de la LRBRL no significa, ni trae de suyo *eo ipso*, que desde la entrada en vigor de la LRSAL deban considerarse sin efecto, y automáticamente extinguidas las autorizaciones excepcionales otorgadas con arreglo a la Disposición Adicional 3ª del **Real Decreto 1732/1994**, como una derogación con efectos retroactivos o como cesación de eficacia de la autorización excepcional concedida en su día, y que permita incluir en los concursos unitarios los puestos desempeñados por funcionarios de la Corporación al amparo de la DA 3ª del RD **1732/1994**.

Es aquí donde a nuestro juicio, y sino estamos en un error, hay que focalizar el dilema, que consiste en un primer paso en establecer los efectos de la evidente antinomia que surge con el art. 92. bis de la LRBRL. Esta cuestión recomienda un examen más detallado, en el que nos adentramos a continuación.

Bien. Pese a que admitamos que la disposición adicional tercera del **Real Decreto 1732/1994** ha perdido su vigencia, derogada por el principio *lex posterior* en tanto se opone de modo antinómico a la nueva regulación (la que se contiene en el art. 92 Bis de la LRBRL) con la que parece presentar una incompatibilidad insalvable, así y todo es forzoso no perder de vista la regla general que preside la derogación de las normas, esto es, que los efectos de la norma derogatoria se producen *ex nunc*. De ahí, entonces, que no quepa entender que los efectos producidos en los nombramientos realizados con carácter excepcional al amparo de la disposición adicional tercera del **Real Decreto 1732/1994** hayan perdido su eficacia por esa derogación (salvo que entendiéramos que las autorizaciones eran temporales y provisionales, sobre lo que volveremos). Antes bien, para estos casos, resulta de aplicación la regla de la ultractividad del régimen derogado, lo cual es proyección del principio de irretroactividad. Ello significa que las normas derogadas perviven temporalmente, pues deben seguir aplicándose a las situaciones surgidas a su amparo antes de la derogación. De modo que el efecto que



produce la derogación ( de no existir norma de retroactividad) es el de limitar en el tiempo la aplicabilidad de la norma derogada solo y únicamente a partir de la *lex posterior* . Por cierto que derogaciones tácitas, resultado de la regla de aplicación del art. 2.2 del Código civil , como también derogaciones genéricas ( *a contrario* ) son desaconsejables, por la inseguridad jurídica que pueden originar (cfr. directrices de técnica legislativa aprobadas por el Consejo de Ministros).

Llegados a este punto el otro plano del problema, cuyo centro se desplaza para pasar a ser el de dirimir si, como nos dice el Abogado del Estado, a partir de la entrada en vigor de la LRSAL, que adiciona el artículo 92.bis) a la LRBRL , resulta ya inoperativa la cobertura excepcional de puestos prevista por la Disposición Adicional Tercera del **Real Decreto 1732/1994**, dada su excepcionalidad. En ese sentido, razonaba el Abogado del Estado, ya se ha dicho antes, que no podía entenderse que el funcionario de la Corporación que desempeña el puesto tenga derecho a permanecer en él, al ser esa forma de cobertura transitoria y no definitiva.

Pues bien, con tal planteamiento se aprecia un salto sin justificar que efracciona ese razonamiento al hacer equivaler lo excepcional con lo provisional o con lo transitorio, nociones o términos jurídicos que en no son equivalentes o intercambiables; y con esa sustitución se incurre luego en el error argumentativo de la falsa contraposición. En efecto, la excepcionalidad de la autorización del ejercicio de las funciones propia de tesorería contemplada por la Disposición Adicional 3ª del **Real Decreto 1732/1994** no puede ser entendida por ello como ejercicio provisional, interino o transitorio del puesto de tesorería, frente al definitivo. Antes al contrario, el funcionario de la administración local nombrado a su amparo no dispone de un nombramiento provisional o interino, lo que lleva aparejado que plaza así provista no se encuentra vacante.

Más aún, se corrobora esta conclusión porque los nombramientos provisionales (acumulaciones, comisión de servicios, nombramientos accidentales, provisionales y nombramientos interinos) se contemplan en el capítulo VI (los arts 30 a 34) del **Real Decreto** 1732/94 , para los que su art. 35 prevé el cese cuando el puesto de trabajo sea provisto por alguna de las modalidades previstas en su art. 10.1; estos supuestos pueden diferenciarse de los nombramientos amparados en la de la Disposición Adicional Tercera que queda fuera del marco de aplicación el citado art. 35 al no formar parte del Capítulo VI.

En definitiva, sin necesidad de examinar las razones complementarias contenidas en la demanda para propugnar la nulidad de la convocatoria en cuanto incluye el puesto de tesorería del Ayuntamiento de Alboraya, procede la estimación del recurso, pues más allá de la derogación por antinomia de la DA 3ª del R.D. 1732/94 por el artículo 92 bis de la LRBRL (y sin perjuicio de desarrollo reglamentario) el puesto de Tesorero del Ayuntamiento de Alboraya se desempeña por funcionario propio de la Corporación conforme a la normativa vigente al tiempo de su nombramiento, y no se ha producido revocación en virtud de retroactividad, y menos aún cesación de eficacia de la autorización que ampara ese nombramiento, pues la convocatoria del concurso unitario no puede tener esos efectos.

**SÉPTIMO** . Para completar nuestro examen, cabe referirnos a los borradores del desarrollo reglamentario previsto en el artículo 92 bis de la LRBRL. En el borrador de **Real Decreto** sobre el régimen jurídico de los funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional elaborado a fecha 9 de diciembre de 2014 se incluía una Disposición Adicional Tercera práctica reproducción literal de su homónima del **Real Decreto 1732/1994** .

Citamos:

«Excepcionalmente, a petición fundada de las Corporaciones locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 euros, cuya Secretaría esté clasificada en clase primera, el órgano competente de la respectiva Comunidad Autónoma podrá autorizar el desempeño del puesto de Tesorería por funcionario de la Corporación debidamente cualificado, que ostente la titulación exigida para el ingreso en la subescala de intervención tesorería, y pertenezca al Grupo A, Subgrupo A1 de titulación»

Sin embargo, el mismo borrador (versión 18.12.2015), en su Disposición Transitoria Sexta, Régimen Transitorio de las funciones de tesorería, se expresa así:

«1. En las Corporaciones Locales de municipios con población inferior a 50.000 habitantes o presupuesto inferior a 18.000.000 euros cuya secretaría esté clasificada en clase primera y que cuenten con la autorización excepcional para el desempeño del puesto de tesorería de la Corporación a la entrada en vigor de este **Real Decreto**, deberán incluir el puesto en los procedimientos de provisión ordinarios de los Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter Nacional, conforme a lo previsto en el artículo 29 de este **Real Decreto**.

Con lo anterior queda mostrada la vacilación sea de retomar la excepción que permitió en su momento el desempeño de estos puestos a funcionarios de la Corporación, sea considerar producida la vacancia,



ordenando la cobertura y, en este caso, sin concretar la forma y efectos de cesación de eficacia de las autorizaciones hasta la fecha concedidas.

**OCTAVO.** Concurren dudas jurídicas bastantes para no condenar en costas conforme autoriza para estos casos al artículo 139 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso- Administrativa .

## FALLO

En atención a lo expuesto, esta Sala ha decidido:

Estimar el recurso contencioso administrativo interpuesto por el procurador don Alonso de Murga Florido, en nombre y representación de Ayuntamiento de Alboraya, impugnando la resolución de 27 de octubre de 2015, de la Dirección General de la Función Pública del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, por la que se convoca concurso unitario de provisión de puestos de trabajo reservados a funcionarios de administración local con habilitación de carácter nacional, publicada en el BOE nº. 276 correspondiente al 18 de noviembre 2015, anulando la resolución recurrida por ser contraria a derecho en cuanto se incluye en la convocatoria la plaza de Tesorería del Ayuntamiento de Alboraya. Sin costas.

La presente sentencia es susceptible de recurso de casación, que deberá prepararse ante esta Sala en el plazo de **treinta días** , contados desde el siguiente al de su notificación, acreditándose en el escrito de preparación del recurso el cumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 89.2 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa , con justificación del interés casacional objetivo que presente. Previa constitución del depósito previsto en la Disposición Adicional Decimoquinta de la Ley Orgánica del Poder Judicial , bajo apercibimiento de no tener por preparado el recurso.

Dicho depósito habrá de realizarse mediante el ingreso de su importe en la Cuenta de Depósitos y Consignaciones de esta Sección, cuenta-expediente nº 2581-0000-93-0006-16 (Banco de Santander, Sucursal c/ Barquillo nº 49), especificando en el campo **concepto** del documento Resguardo de ingreso que se trata de un "Recurso" 24 Contencioso-Casación (50 euros). Si el ingreso se hace mediante transferencia bancaria, se realizará a la cuenta general nº 0049-3569-92-0005001274 (IBAN ES55-0049-3569 9200 0500 1274) y se consignará el número de cuenta-expediente 2581-0000-93-0006-16 en el campo "Observaciones" o "Concepto de la transferencia" y a continuación, separados por espacios, los demás datos de interés.

Así se acuerda y firma.

**PUBLICACIÓN.-** Leída y publicada ha sido la anterior sentencia por el/la Ilmo/a. Sr/a. Magistrado/a Ponente D./Dña. JOSÉ FELIX MARTÍN CORREDERA, estando la Sala celebrando audiencia pública en el mismo día de su fecha, de lo que, como Letrado/a de la Administración de Justicia, certifico.